

Rev. L. Lora: 1998

**ACTAS DEL IV CONGRESO
INTERNACIONAL DE
ETNOHISTORIA**

23 a 27 de octubre de 1986

TOMO II



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FONDO EDITORIAL 1998**

18

Ana María Lorandi
Universidad de Buenos Aires

Pretendemos aquí ofrecer una síntesis de los desafíos metodológicos que enfrentaron los investigadores del Programa de Etnohistoria Andina, del Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estos forman parte de una experiencia colectiva que, con sus aciertos y sus dudas, deseo compartir con los colegas. Por cierto que esta no ha sido una experiencia en soledad, sino que nos hemos beneficiado de los trabajos de otros especialistas, sobre todo de aquellos que investigan las poblaciones que ocupaban el actual territorio boliviano. Para el caso de los estudios del noroeste argentino, en cambio, podemos reconocer sin falsa modestia que dimos el puntapié inicial de una visión renovada, debido a que en el momento que comenzamos no existían investigaciones con el mismo enfoque etnohistórico y estas circunstancias nos obligaron a aplicar mucho más esfuerzo e imaginación. En este sentido, hemos trabajado en casi todos los casos con lo que Carlo Ginzburg (1994) ha llamado el método "indicial": buscar las evidencias en los datos secundarios tanto o más que en los primarios. Y debemos reconocer que lo hicimos mucho antes de haber leído el artículo del notable italiano. Y no fue sólo una aventura teórica, sino fundamentalmente metodológica, aprendidos por el imperio de las circunstancias. O hacíamos esto o no hacíamos nada y decidimos avanzar, tal vez con una cierta cuota de inconsciencia, a veces teniendo la sensación de que nos arrojábamos al vacío.

1.- El problema teórico

Antes de entrar de lleno al tema propuesto, conviene hacer algunas referencias teóricas que sustentan y justifican los enfoques metodológicos que hemos adoptado. Uno de los primeros problemas que nos planteamos se refiere al espacio teórico que se puede otorgar a nuestro noroeste dentro de la macroárea andina meridional. Este es un concepto elaborado por los arqueólogos, con base en el reconocimiento de los vínculos culturales que se observan entre las diversas sociedades que habitaban esta región, al menos desde Tiwanaku. En el período subsiguiente, las comunidades altiplánicas continuaron manteniendo colonias en la costa o en los valles, o relaciones de intercambio con las comunidades que habitaban esos espacios ecológicamente diferenciados. Esta práctica de control vertical de recursos (Murra, 1975) o de intercambios (Browman, 1980; Assadourian, 1987) fue más intensa y visible entre las poblaciones del altiplano, las cuales necesitaban productos que no se podían obtener en las condiciones extremas donde residían sus núcleos. Pero éste no fue el único mecanismo utilizado para resolver los problemas de control de recursos. Por el contrario, nuestros estudios (del Río, 1989) mostraron que existieron otras formas de "diversificación de riesgos" que operaban en distintos niveles de complejidad política. Por ejemplo, en la nación Qharaqhara del repartimiento de Chaqui, los distintos grupos étnicos que la integraban, como los visisas, los macha, los chaqui, los caquina, los picachuri, etc., interdigitaban tierras y recursos entre sí, o sea que en muchos casos un grupo tenía suyus agrícolas o pasturas en las proximidades de las cabeceras de otro. Ana María Presta (1995) ha constatado ejemplos similares para la zona de Tarija, donde la ocupación de algunas de estas parcelas, ubicadas en territorios ajenos, se originó en los desplazamientos incaicos, pero otras pueden muy bien responder a un modelo de "diversificación de riesgos" mucho más antiguo. Aún se da el caso de distintos ayllus de un mismo grupo étnico que explotaban recursos en ámbitos discontinuos. Según Mercedes del Río estas prácticas muestran que la variedad de estrategias para maximizar el control de recursos se encuentra en la base del éxito de las comunidades

altiplánicas para enfrentar posteriormente la coacción colonial y simultáneamente favorecieron la construcción de redes sociales más complejas y estratificadas que aseguraron la estabilidad de la complementariedad económica por medio de la regulación política y ritual.

En los estrechos valles del norte argentino el acceso a distintos pisos ecológicos y a sus correspondientes recursos podía lograrse mediante un control territorial continuo o en ambientes que se encontraban a una o dos jornadas de distancia, al menos en algunas zonas. Por ejemplo, esto era posible en los valles Calchaquíes, desde donde se accedía fácilmente a la Puna por las quebradas del oeste o a los yungas de los cerros que delimitaban sus territorios por el este (Lorandi y Boixadós, 1987-88 y Lorandi et al, 1995; Lorandi y de Hoyos, 1994). Sin embargo, en la zona de la actual frontera argentino-boliviana, la obtención de los recursos de yunta exigía que los puneños y aun los atacameños tuviesen que instalar colonias o utilizar intermediarios para salvar las grandes distancias que los separaban de las maderas, de las plumas o de los alucinógenos. En una reciente reunión de arqueólogos de Chile y Argentina, (Tilcara 1994), se discutieron las evidencias sobre estos intercambios a grandes distancias. En qué medida estas prácticas de control a grandes distancias que observa la arqueología pueden ser probadas por la etnohistoria es harina de otro costal. En estos casos, el etnohistoriador necesita hacer una fina interpretación de los datos para distinguir las colonizaciones en el nivel de las jefaturas, de aquellas que fueron promovidas por la intervención incaica. Puesto que ésta última no queda siempre incuestionablemente aclarada en nuestras fuentes, obliga a la construcción de hipótesis alternativas, tal como lo hemos visto al estudiar las relaciones entre los omaguacas y los ocloyas (Lorandi, 1984). En este sentido, la "verticalidad", a pesar de las variaciones que la ecología imponía en cada caso, es uno de los rasgos andinos comunes que otorgaban unidad a la región. Pero debemos decir que, en general, hubo menor necesidad o capacidad política de instalar colonias o de realizar intercambios a largas distancias, excepto en el caso de las poblaciones puneñas, aunque debemos aceptar que en tiempos

prehispánicos se hayan producido con mayor intensidad o amplitud que en los coloniales. A su vez, esto pudo limitar la necesidad de organizar estructuras políticas más complejas y, consecuentemente, favorecer la perduración de cacicazgos con base territorial y demográfica más reducida que en el centro del altiplano y sus grandes valles mesotérmicos.

Es por eso, entonces, que debimos discutir la problemática que se desprende de la existencia de sociedades complejas, otro de los rasgos que se encuentran en la base de la unidad del área, pero que se manifiestan con distintos grados de jerarquización interna. Es evidente que a medida que se avanza hacia el sur se pasa de estructuras políticas muy estratificadas a otras más simples y con menor caudal demográfico. En la zona altiplánica existieron señoríos, reordenados y rejerarquizados por la intervención inca, gobernados por jefaturas que se rodeaban de abundantes símbolos de poder. Seguramente todavía hay mucho que hacer en este tema, sobre todo en lo referente al papel de la reorganización inca y el reforzamiento de los poderes curacales. Mercedes del Río ha analizado el testamento de un curaca donde se enumera una abundante parafernalia de bienes simbólicos, otorgados por los monarcas cuzqueños, para legitimar las funciones estatales que se le habían asignado a uno de sus ascendientes (del Río, 1990a).

Es difícil encontrar curacas con similar grado de poder en el noroeste argentino, excepto tal vez en la Quebrada de Humahuaca y en los valles Calchaquíes, pero no tenemos pruebas documentales para afirmarlo. Los personajes más conocidos como Viltipoco o Juan Calchaquí ejercieron liderazgos de gran amplitud geográfica, pero esto era evidente sólo en casos de confederaciones guerreras (Lorandi 1984; 1988a y 1988b). No hay pruebas fehacientes de que encabezaran estructuras internas muy jerarquizadas y es posible que en respuesta a la resistencia que los chichas (Betanzos [1551] 1987; Zanolli¹ 1995b)

¹ Zanolli dispone de datos que están sugiriendo que los Omaguacas eran parte de los Chichas

y los calchaquíes (Lozano 1784-1785) opusieron a los incas, éstos hayan modificado las cuotas de poder preexistentes y desestructurado los lazos de cohesión interna, infiltrados por grandes contingentes de mitimaes y autoridades impuestas desde el Cuzco (del Río y Presta 1984 y 1995; Presta 1995; Lorandi y Cremonte 1991). Viendo este problema desde la doble perspectiva: 1) estructuración como capacidad autónoma para organizar jefaturas fuertes y 2) papel del Estado inca para reforzarlas (altiplano) o para fragmentarlas (frontera oriental y valles del NOA), la tarea comparativa aumenta sensiblemente en complejidad si se pretende avanzar hacia atrás y alcanzar los niveles preincas. También fue necesario ponderar las diferencias cuali-cuantitativas de la documentación que estas situaciones generaron en la posterior colonización de ambas áreas.

2.- El problema de las estructuras políticas

En realidad, las aparentes diferencias entre los señoríos del norte y las jefaturas menos jerarquizadas del sur encierran todavía sus grandes interrogantes. La mayor dificultad se vincula con las alteraciones que produjo el Cuzco en el mapa étnico y político a lo largo del territorio del Tawantinsuyu. Para identificar estas alteraciones fue necesario instrumentar diversos recursos metodológicos que evitaran incurrir en el error de aceptar como originales las organizaciones políticas que estaban vigentes al momento de la conquista española. Por otro lado, es indudable también que los documentos que el etnohistoriador debe utilizar están "contaminados" por las alteraciones coloniales. De modo que, como resultado de estas dos intervenciones, aun para la información más temprana, el investigador que pretende recuperar el estado de las agrupaciones políticas, tal como pudieron estar estructuradas antes de la conquista inca, debe pasar todos los datos por un doble filtro de confiabilidad.

Es así que fue necesario comprender que si nos proponíamos como objetivo excluyente el de descubrir el estado "prístino" de las agrupaciones étnicas nos encontraríamos rápida-

mente en un callejón sin salida. Para el norte argentino, que dispone de documentación más escasa que el Perú o Bolivia, si lo que nos interesaba era estudiar las transformaciones sociales a lo largo del proceso colonial, debíamos aceptar la validez de cualquier "punto cero" para iniciar nuestras investigaciones. O sea, partir de la estructura sociopolítica que podíamos recuperar en el momento más antiguo posible, de acuerdo con lo que nos permitía la documentación, adicionándole un trabajo de interpretación sutil e imaginativo, a la vez que riguroso y prudente, que nos permitiera construir hipótesis sobre el pasado y las identidades que se encontraban ocultas en la maraña de los datos y determinar, sólo cuando era posible, si las unidades socialmente integradas que identificábamos correspondían o no a una identidad étnica, y en este caso si ésta estaba incluida o no en una macroetnia mayor.

Este punto exige algunas advertencias adicionales. La primera es que los recursos metodológicos que se utilizan deben ser adecuados a las características de la documentación con la que se trabaja. Y que ésta, a su vez, responde a una triple realidad: a) la estructura étnica y el grado de cohesión o complejidad de la estratificación política; b) el tipo de relaciones que los grupos étnicos mantuvieron tanto con los incas como con los españoles, (o sea alianzas, incorporaciones con escasa oposición o resistencia prolongada) considerando también las respectivas adaptaciones y/o transformaciones de acuerdo con las coyunturas históricas que se sucedieron a lo largo del tiempo. Y, c) los intereses europeos en cada subregión, sumados a las modalidades que adoptaron las instituciones coloniales en relación con los dos puntos anteriores. Nuestra experiencia colectiva ha mostrado que los instrumentos conceptuales y metodológicos que se aplicaron a los estudios sobre el Tucumán colonial debieron ser elaborados específicamente y que hubiese sido erróneo transferir, en forma más o menos automática, los que se utilizan para analizar las estructuras políticas de sector norte del área andina meridional. Por ejemplo, para analizar la estructura étnica Qharaqhara, del Río pudo realizar, sin mayores lagunas, una historia regresiva que partía de la reorganización toledana en repartimientos y corregimientos, pasando por

las encomiendas, para llegar a la organización inca. Esta historia regresiva, más o menos continua, no es posible en el norte argentino. La información es demasiado fragmentada y las lagunas temporales muy extensas. Salvo en casos excepcionales, ha sido posible vislumbrar algunos aspectos, como en el valle Calchaquí, pero es casi imposible remontarnos con algún grado de confiabilidad a los tiempos prehispánicos. Sobre todo porque nuestras preguntas no siempre coinciden con las de los arqueólogos que a veces, yo diría, ejecutan su música en otra tonalidad.

Uno de los recursos metodológicos más reciente y que hemos utilizado en la medida de lo posible se refiere al análisis del discurso (Pizarro, 1992). En los casos del Tucumán colonial nos hemos visto obligados a una tarea inferencial muy sutil. Debimos utilizar exclusivamente el análisis del discurso de los papeles administrativos de los europeos, ya que no existen documentos escritos por los actores indígenas que reflejen la estructura social ni sus intereses. Con este recurso tratamos de descubrir las voces de los indígenas detrás de la polisemia de las categorías empleadas en la documentación y de las variadas capas de mediatización de los actores europeos. Como ejemplo de este esfuerzo, que por otra parte se repitió en cada una de las investigaciones, podemos señalar el examen seriado de las categorías espaciales, étnicas y políticas presentes en los documentos coloniales referidos al valle Calchaquí (Lorandi et al, 1995; Lorandi y Bunster, 1987-88). Sin embargo nos debimos enfrentar a casos aun más oscuros, como en el valle de Catamarca (Schaposchnik, 1991 y 1995) en los que fue necesario hacer verificaciones minuciosas al interior de un mismo cuerpo documental para descubrir, a partir de la contrastación entre la concesión de la encomienda y los actos de posesión, la naturaleza del sistema político; con el mismo objetivo para las poblaciones de La Rioja, Boixadós (1995) ha analizado con lupa las actitudes frente a las rebeliones. En este punto, no podemos dejar de señalar que, a medida que los españoles profundizaban el contacto con las poblaciones de la región, fueron comprendiendo que no podían utilizar las mismas categorías que les resultaban familiares en el norte. Es así que ya no recono-

cen mitades y ni siquiera utilizan el concepto de "ayllu". Optan por un término neutro como "parcialidad", y en la mayor parte de los casos, si bien con felices excepciones, se abstienen de indicar si eran *parte* de una unidad mayor. El resultado es que el término "parcialidad" hace referencia tanto a grandes grupos (internamente subdivididos y jerarquizados) como a pequeñas jefaturas (integradas por uno o dos linajes) mostrando que los españoles usaron esta categoría con mayor flexibilidad que en otras zonas periféricas, como en Ecuador por ejemplo (Caillavet 1991). Las dificultades para reconocer la estructura política de los grupos que se iban repartiendo se refleja en las fórmulas jurídicas empleadas en las cédulas de encomienda (Boixadós, 1992) y que provocan serios conflictos de interpretación entre diversos aspirantes a las encomiendas. O sea que los litigantes, amparados en esas ambigüedades, pretendieron derechos sobre los mismos pueblos y esto exige circular con mucho cuidado entre los argumentos e informaciones que ofrecen los contendientes.

En la mayor parte de los casos la fragmentación de los datos obligó a realizar un cuidadoso "tejido" que permitiera salvar las ambigüedades y los silencios, resultado de la falta de interés de los colonizadores locales por conocer a fondo la organización política regional, puesto que el modelo de encomienda de servicio personal sólo necesitaba asegurar un determinado caudal demográfico. Rodolfo Cruz (1995), por ejemplo, recurrió a cruzar los conceptos de filiación y residencia para circular en la maraña de intereses que desvelaban a los encomenderos de los tafíes y amichas, preocupados por reunirlos o desmembrarlos.

En otro orden metodológico, la generalizada rebelión de casi todas las poblaciones del tronco diaguita-calchaquí de 1630-42, por una parte, y la prolongada resistencia de los habitantes del valle Calchaquí desde la época de las primeras "entradas" en 1543 hasta mediados del siglo XVII por la otra, obligaron a adoptar un enfoque interactivo, con el objeto de salvar la escasez de descripciones directas o de participación "comensal" de los indígenas -en el sentido de Aguirre Beltrán (1982)-

dentro del sistema colonial (Lorandi y Boixadós, 1987-88; Schaposchnik, 1995). Como consecuencias de las guerras y de los traslados, se constituyeron nuevas comunidades, resultado de segmentaciones o refundición de parcialidades, que debieron estudiarse con padrones incompletos, por lo que hubo que ponderar con mucha atención la calidad de los datos demográficos (Lorandi y Ferreiro, 1991; Cruz, 1995); o bien trabajar con pleitos, donde la voz de los indígenas estaba mediatizada por el protector de naturales y, por lo tanto, exigían constantemente agudizar el esfuerzo para descubrir los contenidos ocultos en la polisemia de las declaraciones de litigantes y testigos (Sosa Miatello y Lorandi, 1992). Con las mismas precauciones se consideraron también las presiones chiriguanas y de otros grupos chaqueños sobre la frontera oriental, que fueron una causa constante de estas desestructuraciones y reestructuraciones, tanto en tiempos incaicos cuanto coloniales (Presta, 1995 y Zanolli, 1995; Presta y del Río, 1993 y 1995; Lorandi, 1980). El enfoque metodológico que se utilizó para dar cuenta de cada estructura étnica, en relación con sus respectivas coyunturas históricas, así como la adaptación de las investigaciones a los desafíos de los documentos disponibles, puede encontrarse también en otras publicaciones del equipo (Palermo y Boixadós, 1991; del Río 1989b y 1990a; Gordillo y del Río, 1993).

De más está señalar las dificultades que surgieron por la presencia de un gran número de mitmaquna, y la minuciosidad con que deben considerarse los datos para identificar el origen étnico de algunos de estos grupos y hacer un seguimiento del proceso de etnogénesis cuando permanecieron en sus nuevos asentamientos (para este tema, desde la metodología arqueológica, ver Williams y Cremonte, 1995) Estos traslados, que fueron muy numerosos en toda el área, se acrecentaron en la frontera chiriguana y en el norte argentino (del Río y Presta, 1984; Presta y del Río, 1993; Lorandi, 1980, 1988a y 1992; Lorandi, Cremonte y Williams, 1991; Lorandi y Cremonte, 1991; Doucet, 1993). Para remontar estos problemas fue necesario inventar una metodología ad hoc y echar mano de recursos conceptuales que pudieran adaptarse a las necesidades de cada situación local.

3.- El problema de las transformaciones coloniales

La experiencia compartida permitió desarrollar mayor flexibilidad en la adopción de modelos y de métodos. En este sentido, privilegiamos la naturaleza de la información empírica como punto de partida para tomar las decisiones teórico-metodológicas que mejor se adecuaban a nuestros objetivos.

Con respecto a las relaciones de los indígenas con el resto de los miembros e instituciones de la sociedad colonial, las diferencias en cuanto al sector boliviano, son similares a las tratadas anteriormente. En esa zona, las investigaciones se centralizan en las estrategias colectivas (del Río, 1989 y 1990) o individuales respecto a la hacienda (Presta, 1990a), en el rol de curaca (del Río, 1990a) y los modelos que adoptaron las nuevas comunidades. En el NOA se debieron localizar en la progresiva desestructuración por efecto de las guerras y la resistencia a la conquista (Boixadós, 1995.; Lorandi y Boixadós, 1987-88; Schaposchnik, 1992; López de Albornoz, 1991), en la mayor incidencia del mestizaje (con españoles, con negros, o entre diferentes grupos étnicos; Lorandi, 1992), en las relaciones de los indígenas con sus encomenderos (Ferreiro, 1995; Lorandi, 1988b; Lorandi y Ferreiro, 1991, Lorandi y Sosa Miatello, 1991 y Sosa Miatello y Lorandi, 1992; Sosa Miatello, Lorandi y Bunster, 1995; Zanolli, 1995), o en el papel de la Iglesia en el proceso de dominación (Lorandi y Schaposchnik, 1990). En suma, a partir del siglo XVIII algunas comunidades indígenas persistieron bajo un modelo prehispánico en la Puna (Zanolli y Lorandi, 1995), y en forma decreciente en la Quebrada de Humahuaca y en algunos valles del oeste de Catamarca y de La Rioja. El resto inicia un acelerado proceso de integración-culturalmente muy limitado- pero donde los rasgos sincréticos y la pérdida de la identidad se constituyen en el foco de atención.

Tampoco han estado ausentes, muy por el contrario, la discusión sobre las consecuencias del modo de producción impuesto en el Tucumán y su comparación con el que prevalecía en el Altiplano. En este tema las opiniones dentro del equipo

no han sido unánimes. Personalmente (Lorandi, 1988b) he enfatizado los efectos de la desestructuración provocada por el servicio personal, los traslados por viajes comerciales, el abuso sobre el trabajo femenino, el avance de los hacendados españoles sobre las tierras indígenas, el uso de la religión para obligar a los indios al trabajo forzado y simultáneamente legitimarlo y otras arbitrariedades que contribuyeron a desmembrar a los grupos étnicos. Todo esto sin ignorar la notable importancia, en el plano de las estrategias positivas, que tuvo la resistencia de las poblaciones del valle Calchaquí que se prolongó durante 130 años, ni la rebelión generalizada de 1630-43. Cruz, por su parte (1990-92), ha entablado el debate admitiendo que, sin negar la existencia de estos factores negativos, la sociedad indígena estuvo en condiciones de defenderse de las presiones coloniales, filtrándose en los intersticios del sistema y considerando que las nuevas comunidades pudieron conservar muchos de los rasgos de su matriz prehispánica. Actualmente, disponemos de mejor información para comprender que es posible un balance entre ambas posiciones, si consideramos las diferencias locales, resultado de los procesos históricos subregionales (Zanolli y Lorandi, 1995). Aún así, mi opinión personal es que, en la mayor parte de la región, las transformaciones coloniales ganaron la batalla a las fuerzas conservativas de las identidades y tradiciones prehispánicas, pero sin dejar de reconocer que se implementaron tácticas de evasión, considerada una de las modalidades de la resistencia (Urton 1991), rebelión o resistencia armada y búsqueda del amparo judicial.

4.- La sociedad hispano-criolla

Sólo un breve párrafo sobre este tema, que hace poco tiempo hemos iniciado. No es posible estudiar los pueblos indígenas del siglo XVII en adelante sin abordar también el segmento hispano-criollo y sus propias transformaciones tanto sociales como ideológicas. Por un lado, hemos analizado la gesta de Pedro Bohorquez (Lorandi, 1992b) considerando al mismo tiempo su interacción con los indígenas y con las autoridades coloniales por una parte, y la confluencia del imaginario de

restauración del Tawantinsuyu y la búsqueda del Paytiti, por el otro. Esto ha exigido un abordaje metodológico múltiple. En primer lugar, la reconstrucción histórica de los hechos desde diversas perspectivas, utilizando fuentes y bibliografía de muy diverso origen. Además, es necesario hacer un minucioso análisis de los discursos de todos los actores que intervinieron directa o indirectamente en este proceso².

Por su parte, Roxana Boixadós (1995), Juan Pablo Ferreiro, y Ana María Presta (1993) han iniciado estudios sobre las grandes familias de La Rioja, Jujuy y Charcas respectivamente. Esto exige echar mano, simultáneamente, de la teoría del parentesco, de los estudios genealógicos, de las teorías sobre conflictos familiares y constitución de las élites y sus redes de poder. En todos estos temas, tal vez con mayor intensidad que en los estudios sobre poblaciones indígenas, el abordaje del pasado exige ese doble enfoque: el histórico social y el antropológico, que han sido también utilizados por Boixadós (1994) y Ana María Presta (1993). Aquí no pudo estar ausente el análisis sobre la construcción del imaginario del conquistador, de los nuevos espacios de acción política, de la figura del héroe y la hidalguía. En todos estos trabajos estamos en una etapa relativamente inicial, explorando los límites teóricos y metodológicos de la interdisciplinariedad, intercambiando y discutiendo experiencias.

2 El trabajo citado es una breve síntesis de un libro en curso de preparación.